La enseñanza de la Religión en los centros educativos del Estado español: marco jurídico y reflexión pastoral

José Manuel Estepa Llaurens

Entre las cuestiones que interesan por igual a la Iglesia y a la sociedad civil dentro del campo educativo, figura destacadamente la enseñanza religiosa escolar. Esta cuestión ha adquirido un especial relieve en la opinión pública ante el nuevo régimen que para esta enseñanza se establece mediante el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales firmado por la Santa Sede y el Estado español, en 3 de enero de 1979.

En la presente exposición nos limitaremos a describir, primeramente, el marco jurídico y la problemática real que hizo posible y condicionó la enseñanza de la Religión dentro del sistema escolar durante el período histórico precedente, con los esfuerzos desarrollados por la Iglesia, principalmente en la última década, para alcanzar un estatuto más ajustado a las nuevas realidades. A continuación, se expondrá el significado y contenido del nuevo Acuerdo, en lo que se refiere a la enseñanza religiosa, con los problemas a los que habrá que dar respuesta para llegar a una debida aplicación de lo convenido. Finalmente, dejaremos planteada una cuestión que, según nuestro punto de vista, es crucial y condicionante: la necesidad de una mejor comprensión acerca de la legitimidad, el carácter propio y el contenido específico de la Enseñanza religiosa en los centros educativos.

1. Marco jurídico y problemática real de la enseñanza religiosa escolar en el período histórico español precedente.

1.1. En otro lugar¹ hemos ofrecido, con la extensión oportuna, el estudio de la situación legal de la enseñanza religiosa dentro de los

1. «Enseñanza religiosa y Escuela», ponencia presentada a la XXVI Asamblea Plenaria del Episcopado Español (junio 1977), publicada en «Actualidad catequética», n.º 87 (abril-junio 1978).

sistemas educativos de los países de nuestra área cultural, de cómo se ha originado y ha evolucionado en cada uno dicha normativa y cuáles son los problemas que existen y soluciones para los mismos que se han arbitrado hasta hoy. Bástenos ahora recordar algunas conclusiones.

Desde un punto de vista legal:

a) La Enseñanza religiosa forma parte como materia ordinaria, de los programas de estudio primarios y secundarios, en las escuelas públicas de los países de la comunidad europea a excepción de Francia, donde se imparte con carácter voluntario, en horario de la semana escolar para primaria y en tiempo extraescolar para media.

b) Esta Enseñanza se establece para cada una de las confesiones religiosas que cuente con un alumnado numéricamente importante. Y para armonizar la enseñanza religiosa como materia de estudio con la libertad religiosa, está prevista la dispensa de aquélla a petición de los padres o tutores o la sustitución por una clase de moral laica, no confesional.

c) Normalmente la docencia religiosa es asumida por el ministro del culto o sus delegados, de la confesión correspondiente. En el caso de Italia y Holanda, la imparten ordinariamente los maestros de la escuela elemental y también en Alemania, si están dispuestos libremente a ello.

d) La autoridad de las respectivas confesiones ejerce derecho de declaración de idoneidad o de selección del profesorado y de aprobación o decisión sobre los textos de la enseñanza religiosa.

e) La enseñanza de las demás materias en las escuelas públicas se inspira en los principios de laicidad o neutralidad; en esto hay enormes diferencias entre la laicidad irreligiosa francesa y la neutralidad confesional, pero valorativamente respetuosa del hecho religioso, de Alemania y Holanda.

Desde un punto de vista pastoral:

a) La enseñanza de la Religión católica impartida en el ámbito de las escuelas ha sido considerada siempre como un ministerio pastoral o como una acción íntimamente vinculada al ministerio eclesial. Se ha procurado ordinariamente una adecuación al contexto escolar, pero sin excesivas preocupaciones por distinguir muy específicamente entre instrucción religiosa escolar y formación cristiana en el seno de la familia o de la parroquia.

b) En general, la relación religión-escuela se ha aceptado positivamente en los citados países, en el sentido de que a la enseñanza religiosa le corresponde legítimamente un lugar dentro de la ordenación escolar.

c) No obstante, por todas partes la relación enseñanza religiosa-escuela aparece muy condicionada actualmente por las transformaciones que, de hecho, experimentan la Iglesia, la sociedad y la escuela misma en su propia identidad.

d) Cada vez aparece más clara una exigencia de fondo: la existencia y la orientación de la enseñanza religiosa escolar deben concebirse y regularse no solamente a partir de la misión y concepción de la confesión religiosa sino también, principalmente, de la naturaleza y de la realidad de la misma escuela.

e) La enseñanza religiosa escolar debe ser una verdadera educación para la vida y oferta de sentido profundo a la existencia humana. No puede ejercerse esta enseñanza en forma neutral y descomprometida, esto es, como una información meramente objetiva y técnica del fenómeno religioso, sino que sólo alcanza su dimensión propia en el interior de un testimonio auténtico de fe religiosa.

1.2. En España, durante el reciente período histórico, ha existido un cuadro legal que ha permitido una realidad sustancialmente efectiva tanto en cuanto a una cierta inspiración cristiana de toda la enseñanza como en lo que se refiere a la instrucción religiosa en los centros docentes de los diversos niveles.

La enseñanza religiosa ha sido regulada por medio de disposiciones numerosas y precisas que culminan o dimanar del Concordato de 1953.

Tanto los Convenios de 7 de junio de 1941 y 16 de julio de 1946, como el mismo Concordato (27 agosto 1953), condujeron a que las disposiciones sobre materia de enseñanza religiosa fueran objeto de previo acuerdo entre el Gobierno y la Jerarquía eclesiástica. Debe hacerse indicación de las siguientes leyes: Ordenación Universitaria (24 de julio 1943); Educación Primaria (17 de julio 1945, reformada en 21 diciembre 1965); Ordenación de Enseñanza Media (24 febrero 1953); Formación Profesional industrial (20 julio 1955); regulación del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa (28 junio 1967), con la O.M. de 23 de octubre 1967); y, finalmente, General de Educación (4 agosto 1970); y de otro amplio conjunto de decretos y de disposiciones menores.

El régimen docente español ha estado regido por un principio supremo, el de la confesionalidad católica del Estado, del que se deri-

vaban, entre otras consecuencias, estos dos principios: la inspiración católica de la enseñanza («en todos los centros docentes de cualquier orden y grado sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica» (art. 26 del Concordato); la enseñanza de la religión católica, como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales de cualquier orden o grado (art. 27).

La obligatoriedad de la enseñanza religiosa se conjugaba, con la libertad religiosa mediante la dispensa prevista por el propio Concordato (art. 27.1). A solicitud de los padres o de quienes hagan sus veces, *los hijos de no católicos* eran dispensados de la instrucción religiosa católica. Posteriormente, la ley de libertad religiosa (28 junio 1968, art. 7) recogería la misma norma, matizándola y dándole, nos parece, un sentido más amplio, al disponer que «los alumnos de los centros docentes no estarán obligados a recibir enseñanza de una religión que *no profesan*, para lo cual habrán de solicitarlo los padres o tutores si aquéllos no estuvieran emancipados legalmente».

1.3. Si miramos la realidad, y no sólo la normativa legal, advertimos un desajuste entre ambas. La enseñanza de la religión no alcanzó su plena efectividad, sobre todo en la que comenzó a impartirse en los centros de estudios superiores.

El referido conjunto de normas legales respondió, sin duda, a una buenisíma voluntad de querer favorecer la enseñanza religiosa católica, pero —dejando ahora de lado la no existencia de una preocupación efectiva por los derechos educativos de otros creyentes no católicos y de los no creyentes, derechos no bien salvaguardados— aquella normativa se caracterizó por un número grave de deficiencias prácticas. En bastantes aspectos no fue realista y acomodable a la evolución de la sociedad española y de la Iglesia, como señalaremos más adelante.

De todos modos, las posibilidades educativas cristianas propiciadas por tal marco legal fueron muy numerosas y están en nuestra memoria de Iglesia; presentar ahora aquella situación con meros tintes negativos es, por lo menos, una simplificación demagógica del período pasado y de la acción de los católicos en la sociedad española contemporánea.

Interesa, antes de pasar a otra cuestión, el subrayar que, aunque desde un punto estrictamente legal el principio de la confesionalidad católica del Estado resultaba el fundamento de la presencia de la enseñanza religiosa dentro del sistema docente español, sin embargo, la práctica de la Iglesia —según podemos atestiguar después del examen de muy numerosos documentos y directrices diocesanas del

tiempo de la posguerra civil— respondía claramente a las siguientes convicciones:

- la enseñanza religiosa escolar dimanaba en sus raíces, ante todo, de la propia misión evangelizadora y docente de la Iglesia y de la condición de bautizados de la inmensa mayoría de los ciudadanos; por lo que esta enseñanza podía responder, justificadamente, según el punto de vista indiscuso entonces, a una finalidad catequística;

- tal enseñanza debía realizarse de conformidad con la naturaleza de la escuela —en cuanto a su misión de información cultural o instructiva y sus métodos docentes peculiares—; y de acuerdo con la Administración educativa del Estado;

- la obligatoriedad generalizada era vista como algo obvio, ya que parecía, sobre todo, el camino más idóneo, tanto para garantizar que la enseñanza religiosa fuera un servicio para todos (católicos) cuanto para asegurar su personalidad o estatuto académico dentro de la organización docente.

2. *Esfuerzos de la Iglesia en España por establecer un nuevo marco legal y pastoral ajustado a las nuevas realidades. Sentido de las intervenciones fundamentales del Episcopado Español entre 1969 y 1979.*

2.1. La Iglesia española, al finalizar el Concilio Vaticano II, alentó más explícitamente un movimiento de renovación de la educación de la fe cuyos cimientos se estaban poniendo en España desde el año 1956, aproximadamente, muy apoyado en influencias francesas, belgas y alemanas. Estas corrientes renovadoras dejaron sentir muy pronto su impulso dentro de las instituciones escolares.

Una primera cuestión que se planteó en el período postconciliar, en relación con la normativa legal existente sobre enseñanza religiosa, fue la de como adecuar ésta a las exigencias de la libertad religiosa. La ley de regulación del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa, de 28 de junio de 1967, determinó que «los alumnos de los centros docentes no estarán obligados a recibir enseñanza de una religión que no profesen, para lo cual habrán de solicitarlo...» (art. 7,3). Una Orden ministerial del 23 de octubre del mismo año hizo el desarrollo de lo dispuesto en la Ley y artículo citados.

En este momento, la Comisión Episcopal de Enseñanza tuvo mucho interés en subrayar, como orientación intraeclesial, que resultaría un error pastoral el considerar que en el conjunto situacional y cualitativo del catolicismo español de aquellos años, la preocupación

de sacerdotes, padres y educadores se centrara en la búsqueda de soluciones jurídicas sobre la mayor o menor obligatoriedad de la enseñanza religiosa; reducir a esto la compleja problemática de la educación religiosa de niños, adolescentes y jóvenes sería una absurda simplificación. Por su parte, el Episcopado se embarcó en la tarea de renovar los Catecismos, elaborar nuevos programas para primaria y bachillerato elemental y organizar cursos para el Profesorado.

2.2. Peculiar importancia tiene el período que se abre en 1969. En los comienzos de dicho año, el Ministerio de Educación y Ciencia ofreció a la consideración de todos un amplio informe («La Educación en España. Bases para una política educativa»). Este informe denominado familiarmente el «Libro blanco sobre la educación», proponía posiciones sobre un conjunto de problemas que la Comisión Episcopal de Enseñanza, por su parte, venía estudiando desde hacía tiempo. El resultado de esta reflexión eclesial se dio a conocer en 2 de febrero de 1969 («La Iglesia y la educación en España, hoy») Esta declaración, de más de un centenar de páginas, es fundamental para conocer e interpretar lo que la Iglesia española, con un máximo de coherencia, ha venido manteniendo en el campo educativo desde ese momento hasta hoy, tanto públicamente como en sus conversaciones con la Administración del Estado.

Propugnada por el Estado una reforma del sistema educativo, la Comisión Episcopal de Enseñanza tuvo conocimiento (septiembre de 1969) de un anteproyecto de Ley General de Educación que el Gobierno se disponía a examinar para su remisión a las Cortes Españolas. El Episcopado solicitó y mantuvo conversaciones con los altos responsables de la Administración educativa, en orden a exponer la posición de la Iglesia respecto a la profunda transformación que se pretendía para la educación en España. Asimismo hizo pública su posición en declaración de la Comisión Episcopal de Enseñanza sobre la reforma del sistema educativo (28 octubre 1969). Aunque en conjunto se propugnaba una adhesión a la reforma proyectada, se llamaba la atención sobre los desajustes que se producirían o se acentuarían en la vida de la sociedad, si tal reforma en lo educativo no iba a ser acompañada de cambios que resultaban no menos necesarios en otros campos de la vida socio política, v. g. la reforma fiscal.

2.3. Concretamente, en lo concerniente a la enseñanza religiosa escolar, los representantes de la Iglesia, en las referidas conversaciones con el ministerio de Educación, pusieron especial interés en la proposición de los siguientes puntos:

a) La educación general impartida en España debe inspirarse en la concepción cristiana de la vida según es interpretada por la doctrina católica.

b) Debe garantizarse la enseñanza de la fe y la acción espiritual y moral de la Iglesia Católica en los centros docentes estatales y no estatales de los diversos niveles y grados.

c) Corresponde a la autoridad pastoral de los Obispos, tanto en los centros estatales como en los no estatales, señalar para todos los niveles del sistema educativo los objetivos, el contenido, los criterios de programación y la orientación pedagógica fundamental de la formación religiosa escolar.

d) Debe reconocerse el derecho de los Obispos a asumir directamente la responsabilidad sobre Catecismos y otros manuales de fe o libros de texto que se consideren oficialmente necesarios para la enseñanza religiosa escolar.

e) Asimismo es competencia episcopal el establecer normas y orientaciones respecto a la selección y preparación del profesorado y a la organización de este servicio eclesial, de acuerdo con la Administración educativa del Estado.

f) De igual modo, finalmente, la autoridad episcopal se extiende no sólo a los anteriores aspectos concernientes a la ordenación general de la formación religiosa, sino también, irrenunciablemente, a la vigilancia directa sobre la realización de este ministerio docente.

2.4. Todas estas proposiciones fueron aceptadas expresamente por el Ministro de Educación y Ciencia en protocolo privado, previa consulta, de su parte, con más altas instancias civiles, garantizándose a la Iglesia el respeto de aquellas proposiciones en todo el proceso de desarrollo de la reforma, ya que el Gobierno, en el proyecto de Ley General de Educación que remitió a las Cortes Españolas y después fue promulgado *en 4 de agosto de 1970*, adoptó fórmulas muy sucintas para el reconocimiento de estos derechos de la Iglesia y de las familias católicas. Se prometió, consecuentemente, que antes de proceder a regular explicitaciones de los principios recogidos en la Ley General, se mantendrían conversaciones entre el Ministerio y la Jerarquía eclesiástica, ordenadas al correspondiente acuerdo.

La nueva Ley (promulgada el 4 de agosto de 1970) incluía la formación religiosa, como materia ordinaria, en los planes de estudio correspondientes a los niveles primario y secundario. Y, finalmente, establecía lo siguiente: «La ordenación y supervisión de la educación religiosa prevista en el artículo 6.^a, así como la selección del Profesorado para la misma, competen a la Iglesia y serán reguladas por el

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, previo acuerdo con la Jerarquía eclesiástica. Las remuneraciones del Profesorado se fijarán por analogía con las del Profesorado de los correspondientes niveles educativos» (art. 136,4).

2.5. Los cambios implantados en el sistema obligaban también a importantes adaptaciones en la ordenación de la enseñanza religiosa; la normativa que regulaba esta enseñanza, no sólo por los desajustes originados, empezó a no ser aplicada en gran parte. Parecía urgente elaborar y promulgar nuevas normas, sobre cuyo contenido se necesitaba previo acuerdo.

Transcurrido un prudencial tiempo de espera desde la promulgación de la Ley, la XIV Asamblea Plenaria del Episcopado (14-20 febrero 1971) encomendó a la Comisión Episcopal de Enseñanza que reiterara, ante la Administración educativa, la petición de conversaciones para elaborar las bases del previsto y obligado acuerdo. Al mismo tiempo, refrendó plenamente los puntos propuestos por la Comisión al Ministerio, durante el período de elaboración de la Ley.

La Comisión Episcopal tuvo que recurrir (17 julio 1971) al propio vicepresidente del Gobierno, Almirante Carrero, rogando el establecimiento de un cauce autorizado que buscara solución a los problemas planteados. En concreto, se sugería la reanudación de las sesiones de trabajo de la Comisión Mixta Interministerial creada por el Gobierno, en 18 de febrero de 1969, para el estudio de las cuestiones de Enseñanza en relación con la Iglesia, la cual había actuado sólo en la primavera de aquel año.

2.6. Al fin, en 6 de noviembre de 1971, la referida Comisión Mixta Interministerial se constituyó y comenzó sus trabajos. Presidida por el Subsecretario de Justicia, formaban parte de la misma el Director General de Asuntos Eclesiásticos, el Subsecretario de Educación, y los Directores Generales de este Ministerio que parecía oportuno convocar, el Arzobispo Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y el Delegado General de esta Comisión. Se celebraron trece sesiones de trabajo (la última el 27 de marzo de 1973). Por explícita petición de los representantes de la Conferencia Episcopal se dio preferencia en estas reuniones al estudio de las cuestiones concernientes a la enseñanza religiosa. Las negociaciones fueron muy laboriosas y requirieron el que los representantes eclesiásticos reelaboraran varias veces sus propuestas. El documento final aceptado por ambas partes abarcaba, en cuatro capítulos, todos los puntos de interés para la enseñanza religiosa escolar, que carecían de ordenación legal o cuya normativa precedente estaba desfasada o nunca había sido prácticamente apli-

cada. Se evitaba al máximo entrar en modificaciones que pudieran claramente ir contra una interpretación ordinaria del Concordato de 1953, cuya revisión, por otros cauces, estaba resultando un proceso tan erizado de dificultades.

2.7. En la ya citada reunión de 27 de marzo de 1973 el Subsecretario de Justicia, manifestando su plena conformidad personal con el texto elaborado, formuló dos observaciones:

a) tal documento no podría ser considerado todavía propiamente como un acuerdo, sino como base para el mismo, ya que resultaba indispensable que la autoridad civil conociera oficialmente a quien consideraba la Santa Sede representación jerárquica competente para la firma.

b) Mientras tanto y por su parte, existía la conveniencia de que los Ministerios de Justicia y de Exteriores dictaminaran, conjuntamente, sobre la conformidad del proyecto de acuerdo con el Concordato vigente.

2.8. La Nunciatura Apostólica, que había sido informada puntualmente de cada reunión, procedió, según instrucciones de la Secretaría de Estado a solicitar del Episcopado Español garantías de aceptación eclesial del proyecto de acuerdo. Reunida la Comisión Permanente dictaminó su conformidad. En 23 de mayo, la Santa Sede autorizó a la Conferencia Episcopal, y en su nombre a los dos obispos que la habían representado en la Comisión Mixta Interministerial, para la firma.

Después de varias gestiones y entrevistas, el 10 de julio fueron convocados los representantes eclesiásticos a reunión de la Comisión Mixta. Se les comunicó que el proyectado acuerdo no podía ser aceptado por ir, en varios puntos —que no se precisaron—, contra la letra y el espíritu del Concordato; y que por otra parte, un eventual acuerdo no podría ser firmado por representantes de la Conferencia Episcopal, a pesar de la carta de la Santa Sede.

2.9. El Ministro de Educación aconsejó a la Comisión Episcopal de Enseñanza que acudiera directamente al Ministro de Asuntos Exteriores. Así se hizo, informando cumplidamente. Y transcurrido el verano sin noticias de ninguna clase, los Obispos miembros de la Comisión Episcopal de Enseñanza fueron convocados, por su Presidente, a reunión para los días 13 y 14 de septiembre. Precisamente, en la mañana del 13, el B. O. del E. daba a conocer las Resoluciones dictadas por tres Direcciones Generales del Ministerio de Educación acerca de la enseñanza religiosa en los Centros docentes. La Comisión Episcopal de Enseñanza informó públicamente que el contenido de las Resolu-

ciones no había sido objeto de acuerdo previo con la Jerarquía eclesiástica. Tales Resoluciones no sólo eran unilaterales en este sentido, sino que, además, dejaban sin resolver buena parte de las más graves cuestiones planteadas.

2.10. La XIX Asamblea Plenaria del Episcopado (26 noviembre 1973) aprobó explícitamente la actuación de la Comisión Episcopal de Enseñanza y le encomendó proseguir las gestiones en orden a un acuerdo. Sin embargo la situación real se fue agravando, caracterizándose en los niveles intermedios y de base del país, por un doble fenómeno.

a) En los ámbitos oficiales de la Administración, el menosprecio efectivo a todo lo que afecta a la enseñanza religiosa en la convicción, frecuentemente hecha pública, de que la dimensión religiosa se suprimiría en los centros docentes o, al menos, habría de ser sustraída a la competencia e intervención de la Iglesia.

b) En los ámbitos eclesiales, principalmente entre los profesores de religión, un desánimo creciente, una tendencia grande a la deserción, o la afirmación de una opinión cada vez más extendida, de que la institución escolar, especialmente la estatal, no es vía válida de educación religiosa o que, incluso, es absolutamente contradictoria con las exigencias de la formación en la fe.

2.11. Es evidente que las tensiones existentes entre el Estado y la Iglesia en aquellos momentos, repercutían muy desfavorablemente, aunque no por voluntad directa, sin duda, de la mayor parte de los gobernantes, en la enseñanza religiosa escolar. El Episcopado creyó su deber continuar atento a este campo y reiterar sin cansancio su ruego de soluciones. No le faltó el refrendo y el aliento de la Santa Sede. Significativa muestra puede ser el texto siguiente, perteneciente a una comunicación del Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación Católica al Presidente de la Conferencia Episcopal Española (12 de septiembre de 1974):

«Felicitamos a la Comisión Episcopal de Educación y a la Conferencia Episcopal por la atención prestada a un asunto tan actual y tan importante para la vida de la Iglesia, cuyos problemas han detectado y para cuya solución han propuesto oportunas soluciones.

Confiamos que con el mismo espíritu se empeñen en llevar a la práctica las propuestas soluciones, entre las cuales nos permitimos destacar las siguientes:

— Mantenerse firmes en la defensa de su misión y derecho de controlar la enseñanza de la Religión (determinación de los Profesores y

aprobación de los textos de religión), así como en la defensa y apoyo de los derechos de los profesores de Religión.

— Estudiar y llevar a cabo (suponemos que en estrecha unión con la CONFER masculina y femenina y con la FERE), los medios necesarios para superar la crisis que atraviesan los educadores religiosos, uno de los pilares fundamentales del apostolado educativo en España.

— El apoyo masivo a las «Escuelas del Profesorado de Educación General Básica» de la Iglesia.

— Explotar la actual posibilidad de la presencia de los párrocos en la Enseñanza General Básica.

— Intensificar la presencia de la Iglesia en los centros docentes públicos y privados. Un intenso apostolado entre los maestros y profesores será sin duda uno de los mejores instrumentos de lograr esta presencia eclesial.

En estos momentos de dificultades, de crisis, de desaliento e incluso de desorientación en este campo, nunca más oportuna la voz de los Pastores para orientar y reanimar al pueblo fiel y especialmente a todos los que de una u otra manera están dedicados a la educación en la fe».

2.12. Nos ha parecido útil detenernos tan ampliamente en informar sobre estas incidencias vividas desde 1969, por una doble razón:

— en primer lugar, porque el texto del Acuerdo sobre Enseñanza, firmado por la Santa Sede y el Estado en 3 de enero de 1979, es tributario fuertemente de los estudios y de los puntos convenidos en el seno de la llamada Comisión Mixta Interministerial;

— por otra parte, porque las dificultades que se vivieron en aquellos años, para la enseñanza religiosa, acreditan hasta qué punto este campo sufrió y sufrirá siempre de manera grave las consecuencias de las tensiones surgidas entre la Iglesia y la comunidad política en cualquier sector de la vida civil, no siendo salvaguardia suficiente nunca la letra de un Acuerdo, por perfecto que éste sea.

3. *El Acuerdo sobre Enseñanza entre la Santa Sede y el Estado Español.*

A. *Proceso de elaboración y posiciones mantenidas en lo referente a la Enseñanza religiosa Escolar.*

3.1. Una declaración de la Comisión Permanente del Episcopado («Los planteamientos actuales de la Enseñanza», 24 de septiembre de

1976) fijó con diaphanidad el punto de vista de la Jerarquía eclesiástica española sobre la enseñanza religiosa, ante las negociaciones que obligadamente habían de abrirse entre la Santa Sede y el Gobierno, en virtud del compromiso contraído con la firma del Acuerdo Básico de 28 de agosto de 1976, y en orden a llegar a la conclusión de nuevos Acuerdos sustitutivos del Concordato de 1953.

Después de una reflexión doctrinal sobre la necesidad de articular la educación en la fe con los demás saberes humanos; de afirmar el sentido positivo de la libertad religiosa, y de proclamar la idoneidad de la escuela como lugar para transmitir un saber orgánico de la fe católica, los Obispos apuntaban algunas consideraciones prácticas sobre los derechos de quienes asisten a las escuelas estatales, propugnando la formación religiosa como oferta para todos, de la que se pudieran eximir quienes no la deseen; explicaban su concepción de la formación religiosa escolar como una disciplina o saber razonado, en diálogo con los restantes saberes y conocimientos; afirmaban la necesidad de que subsista en la escuela la enseñanza de la religión —renovada y adaptada— a pesar de las inevitables limitaciones para la misma procedentes de personas y estructuras educativas; finalmente, exponían su posición acerca de quiénes deben asumir la docencia religiosa en los centros escolares.

3.2. El tema fue abordado de nuevo por la XXVI Asamblea Plenaria del Episcopado. En declaración final («La Enseñanza religiosa en las escuelas», 25 de junio de 1977), los Obispos vertebraban su pensamiento en torno a la conexión entre educación en la fe y educación humana integral; y al derecho prioritario de los alumnos mismos y de sus padres. La posición quedaba así fijada:

«Nos parece que para la aplicación de este principio de respeto al derecho de los padres de familia sobre la educación moral y religiosa de sus hijos, si de verdad se quiere que en las circunstancias presentes de la educación en España resulte efectiva, la enseñanza religiosa en los Centros del Estado debiera atenerse a las siguientes condiciones:

a) que forme parte de los planes de estudio de los niveles educativos correspondientes a niños y adolescentes; ya que privar a la enseñanza religiosa del carácter académico (el cual no contradice su peculiar tratamiento pedagógico) la conduce, sin remedio, a una yuxtaposición y consideración de añadido dentro de la escuela;

b) que la enseñanza de la religión católica se imparta de conformidad con la doctrina de la Iglesia, reconociendo la competencia que corresponde a la Iglesia sobre la misma; enseñanza hecha con una in-

tencionalidad educativa, respetuosa de la libertad y del proceso de maduración del alumno, pero sin reducirla a una mera información descriptiva del fenómeno religioso;

c) Que se ofrezca a todos los alumnos, considerando eximidos de la misma a los alumnos no católicos y a aquellos alumnos católicos cuyos padres decidan renunciar a la enseñanza religiosa en el ámbito del centro escolar y, por último,

d) que sea impartida por aquellos que se reconozcan creyentes y estén dispuestos a colaborar en esta acción educativa con los padres de familia y con la Iglesia. Por tanto, que ningún profesor de centro público esté obligado a enseñar religión a sus alumnos y, asimismo, que ningún profesor pueda ser impedido de hacerlo si lo solicita y posee la venia de la autoridad eclesiástica».

3.3. Mientras se negociaba en el nivel correspondiente y por las personas encargadas por la Santa Sede de esta delicada tarea, la cuestión fue alcanzando ecos amplios y polémicos en la opinión pública, en especial en lo referente a la legitimidad y a la naturaleza de la enseñanza religiosa escolar. La Comisión Permanente del Episcopado (17-18 mayo 1978), después de recordar que las personas o grupos que discrepan de los Obispos en cuestiones de este relieve no pueden atribuirse representatividad oficial de la Iglesia, pasaba a comunicar los siguientes puntos de acuerdo manifestados en la reflexión mantenida:

a) Que en cualquier sistema educativo y en todo centro de enseñanza debe quedar garantizado el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que haya de darse a sus hijos, especialmente en el orden moral y religioso.

b) Que en la formación religiosa, sin olvidar la prioridad de la comunidad cristiana en este quehacer ni las dificultades que le salen al paso en el ámbito escolar, el Episcopado Español sostiene que esta enseñanza debe mantenerse como oferta efectiva de los centros docentes a todos los alumnos, respetando la libertad religiosa; que debe ser impartida según los métodos y objetivos de la institución escolar, atendiendo al nivel humano y religioso de los alumnos, y que su autenticidad ha de estar garantizada por la propia Iglesia o confesión religiosa.

c) Por último, la Comisión Permanente recomienda a la Comisión Episcopal de Enseñanza que continúe en sus esfuerzos de clarificación y diálogo para buscar salida pastoral a las dificultades presentes, y le encomienda que prepare, en breve plazo, una declaración al respecto sobre los puntos necesitados de definición y claridad,

siempre en consonancia con las directrices de la Santa Sede, de los Sínodos de los Obispos y del Episcopado Español sobre educación y catequesis».

3.4. Por su parte, la Comisión Episcopal de Enseñanza pretendió obviar de algún modo el vacío y las deformaciones cada vez más tangibles que se producían en este sector de la enseñanza, tanto por la ausencia de normas legales cuanto por la influencia de planteamientos críticos desorientadores sobre profesores, padres y alumnos. A este efecto, ante el retraso habido en la formalización del Acuerdo entre Santa Sede y Gobierno y para evitar el riesgo de que las dificultades prácticas se acrecentaran, conduciendo a situaciones irreversibles, hizo públicas (septiembre 1978) unas Recomendaciones para la orientación de la Enseñanza religiosa durante el curso 1978-1979. En estas pautas comunes de actuación, obviamente, se procuraba ajustarse (sin poderlo decir claramente) al proyecto de texto que previsiblemente sería adoptado para el Acuerdo ya tan esperado y necesario.

Poco más tarde, todos y cada uno de los Obispos españoles eran consultados por la Nunciatura Apostólica sobre un punto muy concreto de la enseñanza religiosa, en orden a salvar el principio de la libertad religiosa sin establecer discriminación alguna en la actividad escolar.

B) *El contenido del Acuerdo.*

3.5. Cuando se dio a conocer el texto del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito por la Santa Sede y el Gobierno español el 3 de enero de 1979, no había razón para la sorpresa en lo que se refiere a la enseñanza religiosa; ya se preveía que en el marco de tal Acuerdo solamente se recogerían las principales líneas reguladoras, quedando importantes y numerosas cuestiones de orden práctico para futuros convenios complementarios a establecer entre el Estado y el Episcopado Español. Describiendo el contenido del Acuerdo, ya bien conocido por todos, se caracterizaría así:

a) El gran principio inspirador es el de la libertad religiosa. Por lo tanto,

— se respeta el derecho de los alumnos, y de sus padres, tanto en centros estatales como no estatales (cfr. art. 1);

— como consecuencia de este derecho, la enseñanza de la religión se impartirá, formando parte de los planes educativos de niveles no universitarios, en todo tipo de centros, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales (cfr. art. 2);

— pero esta enseñanza no tendrá carácter obligatorio para todos los alumnos, aunque se garantizará la posibilidad de recibirla; y este hecho, como también el de no recibirla, no puede originar discriminación alguna para el alumno (cfr. Art. 2).

b) Se reconoce a la Iglesia una competencia propia sobre la enseñanza de la religión católica,

— en cuanto al profesorado (cfr. art. 3),

— en cuanto programas, libros de texto, material didáctico, etc. (cfr. art. 6),

— en cuanto a la posibilidad de establecer, dentro de los centros, actividades complementarias de formación y asistencia religiosa (cfr. art. 2),

— en cuanto al derecho de velar, en el ámbito propio, porque esta enseñanza y formación existan y se desarrollen adecuadamente (cfr. art. 6).

c) La Administración educativa asume la responsabilidad que corresponde de retribuir al profesorado no perteneciente a los cuadros docentes del Estado y que imparta la enseñanza religiosa en los centros públicos (cfr. art. 7).

d) Finalmente, se preve, aunque con carácter voluntario para el alumnado, la obligación de ofrecer una enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas de formación del Profesorado (cfr. art. 4).

4. *La aplicación de este Acuerdo y los problemas pendientes.*

Desde la fecha de la firma, la Comisión Episcopal de Enseñanza, por encargo de la Permanente del Episcopado, recabó del Ministerio de Educación el establecimiento formal de negociaciones para llegar a los puntos de convenio previsto por los propios Acuerdos. Para guiar la intervención de la Comisión Episcopal ante el Ministerio, la XXX Asamblea Plenaria (en febrero de este año 1979) aprobó una propuesta de bases de aplicación.

4.1. Puntos a resolver o convenir todavía son numerosos y de relieve práctico todos ellos. Guardando el mismo orden mantenido al exponer anteriormente el contenido del Acuerdo, tómense en cuenta las siguientes cuestiones:

— ¿en qué sentido la educación impartida en los centros públicos será respetuosa de los valores de la ética cristiana?

— ¿cuáles son las condiciones equiparables a las demás materias

fundamentales, en cuanto a horas de clase, aulas, medios didácticos comunes, etc.?

— ¿cómo aplicar el carácter de no obligatoriedad para los alumnos?

No se dice quien decide si un alumno deberá acudir o no a esta enseñanza. A la luz del art. 1.º parecería que son los padres, pero ¿sería contrario al Acuerdo alguna participación de alumnos de Bachillerato, aunque sean menores de edad, en la decisión de recibir o no esta enseñanza?

No se dice en concreto cómo debe organizarse el sistema de inscripción o de exención en la clase de religión. No iría contra el espíritu del Acuerdo el hecho de que para no asistir hubiera de solicitarse expresamente la dispensa; tampoco iría contra el Acuerdo organizarlo de modo que tanto la asistencia como la no asistencia suponga declaración explícita al inicio del curso o de la etapa escolar. En cambio, iría contra el supuesto básico del Acuerdo, el organizar la inscripción de modo que se de por supuesto que nadie quiere la clase de religión a no ser que lo solicite.

— si la enseñanza religiosa es equiparable a las demás disciplinas fundamentales, ¿debe reflejarse y cómo su estudio en los expedientes académicos de los alumnos?

— ¿cómo conciliar la aplicación de todas estas normas a los centros docentes de la Iglesia con el respeto a la peculiaridad y carácter confesional de los mismos?

— ¿cómo hacer efectiva la no discriminación del alumnado que opte en uno u otro sentido, en los diversos niveles educativos y en los diversos tipos de centros?

— ¿cómo concebir el ejercicio de la responsabilidad jerárquica, en todas las dimensiones que le corresponden, para que sea efectiva y, al mismo tiempo, no suponga intromisión en instituciones que no son eclesiales sino civiles?

— ¿qué tipo de profesorado debe ser promocionado y cuál deberá ser su estatuto académico, económico y su relación con la Iglesia? ¿cómo insertar estos profesores en el juego ordinario de la administración educativa y de la vida de los centros? ¿qué niveles de preparación y titulaciones habrán de exigirse?

— ¿en qué consisten las actividades complementarias y cómo orientarlas?

4.2. Ante estos y otros interrogantes, la Comisión Episcopal ha tropezado con una dificultad: llegar a convenir todos los puntos pendientes no podrá hacerse oficialmente con la Administración del Estado hasta que los Acuerdos sean ratificados y publicados en el Bo-

letín Oficial del Estado, lo cual, en estos días de septiembre en que estamos, desconocemos cuando tendrá lugar.

Por ello se ha pretendido obviar esta dificultad en los meses últimos, a través de tres acciones:

a) La elaboración, en colaboración con los representantes de las diócesis, de una Normativa provisional de carácter intraeclesial, en la línea de las Recomendaciones enviadas para el curso 1978-1979.

b) El estudio por todo el Episcopado de algunos puntos de especial relieve que convenga lleven el refrendo de toda la Jerarquía. En este sentido la XXXI Asamblea Plenaria (5 de julio de 1979) ha aprobado una Normativa intraeclesial para la formación religiosa en los centros dependientes de instituciones de Iglesia y en los considerados confesionalmente católicos. Asimismo los Obispos han estudiado los criterios para la elaboración de un futuro estatuto eclesial del profesorado de religión y moral católica.

c) Negociar con el Ministerio de Educación, independientemente del proceso parlamentario de ratificación de los Acuerdos, y sin esperar al mismo, la redacción de una Normativa provisional que pudiera dictarse mediante sendas Ordenes ministeriales para la enseñanza religiosa en los diversos niveles del sistema educativo. Esta iniciativa ha sido acogida favorablemente. El Boletín Oficial de 2 de agosto pasado ha publicado dos Ordenes ministeriales (de 28 de julio) correspondientes a la formación religiosa en Bachillerato y Formación Profesional y en Preescolar y EGB (esta última ha sido objeto de una corrección de errores en el B. O. de 8 del presente septiembre).

Con estas Ordenes ministeriales, que no es posible aquí explicar, y que fundamentalmente abordan y dan cauce para los problemas de la inscripción positiva o negativa, sólo se tiene un medio provisional de responder a interrogantes planteados. Es previsible incluso que algunas de las soluciones esbozadas sean discutidas o rechazadas por ciertos sectores políticos de la oposición al Gobierno. Habrá que esperar, de todos modos, a la ratificación de los Acuerdos y volcar toda la atención en los convenios que habrán de firmarse posteriormente entre el Estado y la Conferencia Episcopal. El camino abierto este año y la experiencia que se acumule serán de gran utilidad.

5. *Legitimidad, carácter propio y contenido de la Enseñanza religiosa escolar.*

No sería honesto el terminar esta intervención sin aludir, al menos, a una cuestión crucial y condicionante: la necesidad de una mejor

comprensión del por qué y para qué de la enseñanza religiosa en los centros educativos.

Muchos malentendidos han servido de plataforma y de amplificador para acrecentar las dificultades y el deterioro con que ha tropezado y tropieza la enseñanza religiosa escolar desde hace años en España.

Como ayuda para la reflexión y como pauta de profundización y de renovación para quienes aceptan el punto de vista del Episcopado, la Comisión Episcopal de Enseñanza ha publicado, en 11 de junio de 1979, unas «Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa escolar». Es un documento importante y útil. Muestra la legitimidad de la clase de religión en el centro escolar y describe sus rasgos específicos, teniendo en cuenta la sociedad plural y el mundo cultural de hoy dominado por los saberes científicos técnicos.

Los católicos —padres de familia, profesores y alumnos mayores— interesados por la problemática de la enseñanza religiosa, que quieran adentrarse con objetividad y espíritu creativo, en fidelidad al Magisterio de la Iglesia y las exigencias de la nueva sociedad, no están desasistidos, si acuden a estos documentos con seriedad y sin prejuicios.